



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

Magistrado

Proceso: Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Demandante: MAGDALENA TRUJILLO Y OTROS
Demandado: JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ PALACIO Y OTRO
Radicado: 052663103001 201400041 01
Decisión: Modifica sentencia
Sentencia No: 029

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, treinta de septiembre de dos mil
veintiuno

Se procede a decidir por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia 8 de abril de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Envigado, dentro del proceso VERBAL de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL instaurado por MAGDALENA TRUJILLO RESTREPO, en su nombre y representación de LUIS EDUARDO CASTRILLÓN TRUJILLO Y CATHERINE CASTRILLÓN TRUJILLO en contra de JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ PALACIO Y JUAN CARLOS GRISALES GONZÁLEZ.

I. ANTECEDENTES

1. Solicita la parte actora que mediante sentencia se declare que los señores JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ PALACIO Y JUAN CARLOS GRISALES GONZÁLEZ en calidad de propietario-guardián y

Radicado 052663103001 201400041 01
J.G.R.G

conductor, son civil, solidaria y extracontractualmente responsables de la actividad peligrosa y como consecuencia se les condene al pago de los siguientes perjuicios: Para la cónyuge **Magdalena Trujillo**, 100 smlmv por perjuicios morales; 100 smlmv por daño a la vida de relación; daño emergente la suma de \$11.420.684; LCC la suma de \$19.680.527 y LCF la suma de \$489.508.585. Para la hija **CATHERINE CASTRILLÓN**: 100 smlmv por perjuicios morales; 100 smlmv por daño a la vida de relación, LCC la suma de \$9.840.258 y LCF la suma de \$9.318.422. Para el hijo **LUIS EDUARDO CASTRILLÓN**: 100 smlmv por perjuicios morales; 100 smlmv por daño a la vida de relación, LCC la suma de \$8.840.258 y LCF la suma de \$119.132.617. Se ordene la indexación de las sumas y la condena en costas.

2. Como sustrato de sus pedimentos, adujeron los hechos que se compendian así:

a) El día 12 de febrero de 2013 en la carrera 48 con calle 32B-Sur a las 23.50 horas en la avenida las Vegas Envigado, el vehículo de placas MFU-180 conducido por JUAN CARLOS GRISALES GONZÁLEZ, transitaba en beneficio de su propietario JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ, quien lo contrató y ordenó que transportara las personas que le indicara y colisionó al vehículo de placas FGV-367 conducido por PETTER CASTRILLÓN CATAÑO quien se encontraba con una compañera de trabajo, ANA CECILIA GIL LONDOÑO, ocasionando accidente donde resultó lesionado aquél, falleciendo como consecuencia el día 21 de febrero del mismo año.

b) Se afirma que el señor CASTRILLÓN CATAÑO tomó la calle 32B sur a fin de atravesar las Vegas, detuvo el vehículo porque el semáforo estaba en rojo y una vez cambia a verde inicia la marcha, siendo colisionado violentamente sobre el costado izquierdo por el

vehículo conducido por el señor GRISALES GONZÁLEZ que no respetó el semáforo de la carrera 48 con la calle 32B sur. Se hicieron presentes las autoridades de tránsito y se percataron que éste último tenía halitosis, se tambaleaba y al indicarle que debían hacerle prueba de alcoholemia se negó y se dio a la fuga y como el accidente fue al frente del periódico el colombiano, algunos periodistas tomaron fotografías, entre ellas el interior de la camioneta donde se observa una botella de aguardiente y una copa. Los hechos dieron lugar a investigación penal y la fiscalía 249 formuló imputación por homicidio culposo agravado en contra de JUAN CARLOS GRISALES. En la actuación contravencional no se ha proferido resolución.

c) El hogar del señor CASTRILLÓN, que era médico y dictaba clases de inglés, estaba conformado por su cónyuge (que tuvo que incurrir en múltiples erogaciones par solventar los gastos y sus dos hijos; CATHERINE vivía en España. La familia sufrió graves perjuicios de orden moral y patrimonial ante su muerte con quien tenían lazos de amor y un cambio grave en el proyecto de vida de la familia, que se encuentra en terapias de duelo.

3. **TRÁMITE.** La demanda se admite mediante auto del 5 de febrero de 2014 con reconocimiento de amparo de pobreza. El apoderado del señor **JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ PALACIO** se opone a las pretensiones y propone como excepciones: falta de prueba del daño, tasación excesiva de perjuicios, enriquecimiento sin causa, culpa exclusiva de la víctima y falta de presupuestos de la responsabilidad civil. El codemandado **JUAN CARLOS GRISALES GONZÁLEZ** también se opone a las pretensiones y propone como excepciones: falta de requisitos o presupuestos necesarios para configurarse la responsabilidad alegada, inexistencia de culpa y/o responsabilidad por el hecho dañoso,

independencia sustancial de la acción civil, penal y contravencional, coexistencia en ejercicio de actividades peligrosas, falta de prueba del daño, tasación excesiva de perjuicios y enriquecimiento sin causa. De las excepciones se corre traslado, ante lo cual el apoderado de la parte demandante se pronuncia ante cada excepción y allega un escrito que le remitió la Fiscalía donde se informa de un preacuerdo con el imputado en donde éste acepta la responsabilidad y a cambio se le eliminan las causales de agravación, la fuga y el estado de embriaguez. Así mismo, se citó para la audiencia de que trata el artículo 101 CPC y se decretan pruebas.

II. LA SENTENCIA APELADA

4. Mediante providencia del 8 de abril de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Envigado consideró que la incidencia del señor GRISALES GONZÁLEZ al mando del vehículo de placas FU-180 fue determinante en el accidente que le produjo lesiones al señor PETER CASTRILLÓN y se erigen como causa única de su fallecimiento en tanto conducía a velocidad alta, bajo los efectos del alcohol y no respetó el semáforo. Además, hubo preacuerdo en la fiscalía y se declaró culpable, sentencia que tiene efectos de cosa juzgada. Por lo tanto, declaró no probadas las excepciones propuestas. En cuanto al perjuicio, consideró que el juramento estimatorio no fue objetado, dando aplicación al artículo 208 CGP y que la cuantía del daño se encuentra acreditada, máxime que las certificaciones allegadas no fueron tachadas de falsas. Actualizó las condenas indicadas por el demandante. Declaró civilmente responsables a los demandados; declara la prosperidad parcial de las excepciones denominadas TASACIÓN EXCESIVA DE PERJUICIOS propuestas por los demandados, no prosperan el resto de las excepciones y emitió condenas en un total

de \$1.494.814.721,20 así: En favor de MAGDALENA TRUJILLO (i) por daño emergente la suma de \$3'814.137; (ii) lucro cesante consolidado la suma de \$279.646.132.20 y futuro la suma de \$760.860.086; (iii) por daño moral la suma de \$60'000.000. b) En favor de Catherine Castrillón Trujillo: (i) por lucro cesante consolidado la suma de \$26.034.952; (ii) por daño moral la suma de \$60'000.000. c) En favor de Luis Eduardo Castrillón Trujillo: (i) por lucro cesante consolidado la suma de \$231.851.522 y futuro la suma de \$12.607.892; (ii) por daño moral la suma de \$60'000.000, no prospera la objeción por error grave y condena en costas así: En favor de la señora Magdalena Trujillo Restrepo, la suma de \$88.346.000. En favor de Catherine Castrillón Trujillo, la suma de \$8.631.711 - En favor de Luis Eduardo Castrillón Trujillo, la suma de \$20.203.129.

III. LA IMPUGNACIÓN

5. Inconformes con la decisión, fue recurrida por ambos demandados, presentando los reparos correspondientes y posteriormente en la oportunidad brindada en esta instancia para sustentar el recurso así se pronunciaron: La apoderada del codemandado **JUAN CARLOS GRISALES** se fundamentó en INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA: *Si bien es cierto que existe dentro del plenario un certificado de ingresos y retenciones, con periodo de certificación 01/01/2012 a 31/12/2012, no hay prueba que indique que, para la fecha de los hechos, el 21 de febrero de 2013, el señor PETTER CASTRILLÓN CATAÑO continuara devengando un salario por parte de la entidad CORPORACIÓN IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, por lo que no puede el fallador, asumir que continuaba vinculado, máxime cuando no se aportó prueba de su trabajo como ocupación ni como labor rutinaria, no se probó mediante contrato laboral prestaciones sociales, tipo de contrato, si era definido, indefinido, por prestación de servicios y más aún, no se logró establecer un salario para una debida valoración de perjuicios. Difiere con el despacho, al darle valor probatorio al certificado de ingresos y retenciones aportado por la parte demandante sin tener presente que el periodo certificado corresponde al año 2012. Aunado en lo anterior, en el interrogatorio a la señora Magdalena Trujillo Restrepo, esposa del señor Castrillón, manifiesta: "PREGUNTADO: ¿Cuál era la*

ocupación del señor Petter Castrillón Castaño al momento de su fallecimiento? **CONTESTADO** Él trabajaba en la CLÍNICA LEÓN XIII en el área de cuentas médicas hacía por ahí 3 o 4 años, no lo recuerdo bien trabajó primero como por servicios o algo así, en la clínica él se ganaba 2.700.000, él tenía diferentes tipos de contratos, pero no todos los contratos fueron con la IPS UNIVERSITARIA...", no obstante, y pese a que menciona que tenía múltiples contratos, no se allegó ninguno a este proceso y mucho menos, se probó que realmente tuviera un ingreso de \$2.700.000. También se les dio valor probatorio a dos certificados de enseñanza, uno expedido por la señora **MARÍA JUDITH CASTILLO MONTOYA** donde indica que mes a mes le pagaba la suma de \$750.000 al señor Castrillón con el fin de que le enseñara inglés a su hijo Simón Cano y el mismo certificado expedido por la señora **MARIANS LUZ CARRASQUILLA QUINTERO** quien refiere que, también le pagaba un valor semanal de \$210.000 al señor Castrillón, para que le enseñara a su hijo Luis Guillermo. Estos certificados carecen de veracidad, toda vez que, no se aportó prueba que efectivamente el señor CASTRILLÓN recibiera dichos valores, pues tratándose de honorarios, él se encontraba en la obligación de pagar seguridad social sobre estos valores adicionales.

Al momento de presentar la demanda, se hace un juramento estimatorio donde tienen en cuenta el material probatorio relacionado en párrafos anteriores, no obstante, considera que, de encontrarse cierto que dicho material carece de valor probatorio, debe procederse con la tasación de perjuicios patrimoniales conforme a lo reglado. Pese a que no se objetó el Juramento estimatorio, fue muy diligente el Juez en solicitar prueba oficiosa de dictamen pericial que una vez presentado, fue requerido para aclaración donde se indicó que "con los documentos obrantes en la demanda se procedió a realizar una experticia técnica sobre los valores solicitados en la misma y su respectiva proyección hacia el futuro, el tema de la procedencia o no de los perjuicios solicitados de acuerdo a lo probado o no probado dentro del proceso es una tarea del señor juez, que, con todo respeto yo no puedo usurpar, que se limita única y exclusivamente a un concepto técnico contable, con fundamentos contables, técnicamente valederos y reconocidos por normas y procedimientos de contabilidad y auditoría ". Algunos de los valores hacen referencia a: • Corporación IPS Universidad de Antioquia: \$2.799.357 • Ingresos Clases de Inglés Particulares: \$1.590.000 • Factor Prestacional Corporación IPS Universidad de Antioquia (24.70%) \$691.441 Para unos ingresos mensuales de \$5.080.798. Tanto el demandante como el perito,

se basaron en unos ingresos que no fueron probados y que el Juez pasó por alto. Por ello, de ser procedente, debe esta Judicatura hacer la valoración de daños y perjuicios de Carácter patrimonial, conforme a lo establecido en el Código general del Proceso. En el caso que nos ocupa, el fallador no solo tuvo presente los hechos probados sino también los no probados para dar lugar a la valoración del daño y así condenar a pagar una suma desbordada, que a todas luces se vuelve impagable para un ciudadano promedio como él. Por lo anterior solicita restarle valor probatorio a lo mencionado y realizar la tasación del daño acorde a lo probado.

El apoderado de **JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ PALACIO** manifiesta que el despacho ha considerado, que en razón a que, no se objetó el juramento estimatorio, se debe dar por probado la existencia del daño y la cuantía. Sin embargo, el inciso tercero del artículo 206 del CGP establece: "aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospecha que haya fraude, colusión o cualquier otra similar deberá decretar prueba de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido". El juez oficiosamente decretó la prueba consistente en dictamen de valoración del daño; al cual, decidió solamente darle valor probatorio en cuanto al perjuicio material, en razón que el perito tuvo en cuenta unos valores no acreditados dentro del proceso, específicamente los ingresos provenientes de las clases de inglés. Esto indica que, pese al haber solicitado una pericia a fin de estimar razonablemente los perjuicios, el a quo, en ese poder de autonomía de la valoración de la prueba desestimó la cuantificación de los perjuicios extrapatrimoniales atinentes al lucro cesante presentada por el auxiliar de la justicia. Empero, dio por acreditado unos ingresos que no se encuentran probados dentro del proceso, específicamente los ingresos que ostentaba la víctima al momento de los hechos. En el acervo probatorio no hay una prueba que demuestre los ingresos devengados por el óbito, al servicio de la IPS Universitaria León XIII, si bien es cierto obra un certificado de ingresos y retenciones del año 2012, el mismo corresponde al año inmediatamente anterior, sin que a la fecha se tenga prueba sumaria que al momento del deceso la víctima aun laboraba en dicha institución. Indica que en el interrogatorio la esposa indicó que devengaba \$2.700.000 pero no se allegó una colilla de pago o certificados bancarios que lo acrediten y se pregunta. ¿Si hubiese dicho que 5 millones, así hubiese quedado establecido? Y las

certificaciones allegadas no son suficientes para probarlo porque no hay soportes de consignación. Por lo cual el juez de primera instancia, parte de una suposición y no una certeza probatoria, lo que daría lugar a declarar la prosperidad total y absoluta de la tasación excesiva de perjuicios, propuesta como excepción de mérito. Ahora bien, la tasación del lucro cesante, consolidado y futuro, se parte de la base que los ingresos actualizados de la víctima responden a \$4.496.223, ingresos que no guardan respaldo probatorio y si al lucro cesante se refiere, no hay un elemento que determine qué tipo de contrato ostentaba el causante, si era por prestación de servicio, a término fijo o indefinido. De allí que el fallador de primera instancia haya incurrido en una indebida apreciación probatoria al momento de emitir el fallo. En consecuencia solicita se revoque parcialmente la sentencia respecto de la cuantificación del lucro cesante consolidado y futuro, concedido a los demandantes en numeral 4 del fallo sentencia número 002 del día 8 de abril de 2021.

IV. CONSIDERACIONES

6. Al no advertirse ningún vicio que pueda invalidar lo actuado y estar satisfechos los presupuestos procesales, se procede a resolver el mérito del asunto. Conforme a la competencia restringida del superior en sede de apelación prevista en el artículo 328 CGP habida cuenta del carácter rogado del recurso de apelación, formulado solo por la parte demandada, la competencia se limita a los motivos de inconformidad expuestos por éstos.

7. Problema jurídico. Se fundamenta en establecer si existió una debida valoración probatoria del material allegado, que en sentir de los recurrentes no existió, porque no se analizaron las circunstancias concretas respecto a la demostración de la vinculación laboral de la víctima, su salario y sus ocupaciones que llevaron al A quo a tomar como ciertos los valores indicados en la demanda, porque no se objetó el juramento estimatorio.

Lo primero que habría que resaltar, es que las pretensiones de la demanda estuvieron cimentadas con el fin de que fuese declarada la responsabilidad civil y extracontractual de los aquí demandados y que fuesen condenados al pago de los perjuicios ocasionados con la muerte del señor PETTER CASTRILLÓN CATAÑO en el accidente de tránsito, ocurrido el 12 de febrero de 2013, sentencia que culminó accediendo a las pretensiones en la forma impetrada, con la consecuente condena al pago de perjuicios.

8. Como no existe discusión alguna frente a la efectiva ocurrencia del hecho y el resultado dañoso que produjo y los motivos de impugnación en ambos demandados, están centrados en la liquidación de los perjuicios, concretamente en los parámetros tenidos en cuenta en lo que toca con lucro cesante, a ello se procederá, partiendo en primer lugar, del tema relacionado con el juramento estimatorio, dado que el A quo consideró que al no haber sido objetado, la cuantía del daño se encuentra acreditada según lo indicado en la demanda y se convierte dicho juramento en *"prueba solemne"* según la sentencia que cita.

El tema del juramento estimatorio ha sido objeto de pronunciamiento por la H. CORTE CONSTITUCIONAL¹ cuando afirma: *"El párrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 hace parte de un complejo sistema legal, como lo es el Código General del Proceso. Una aproximación preliminar al sistema legal sub examine revela la existencia de varias normas que guardan una estrecha relación con la norma demandada, como es el caso de los artículos 8, 26, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 365 y 366 del Código General del Proceso. ...5.2...el Código General del Proceso reconoce, incorpora y desarrolla el principio constitucional de la buena fe. Este principio y su valor correlativo: la probidad, son uno de los pilares de este sistema legal. De*

¹ SENTENCIA C-157/13
Radicado 052663103001 201400041 01
J.G.R.G

ahí que sus manifestaciones contrarias, la mala fe y la temeridad, sean combatidas y sancionadas en múltiples normas.

5.2.1. Por razones de probidad y de buena fe se exige, por ejemplo, que el demandante obre con sensatez y rigor al momento de hacer su reclamo a la justicia, **en especial en cuanto atañe a la existencia y a la cuantía de los perjuicios sufridos**. Como se ilustró atrás, no se trata de un mero requisito formal para admitir la demanda, sino que se trata de un verdadero deber, cuyo incumplimiento puede comprometer la responsabilidad de la parte y de su apoderado. Por las mismas razones se permite que la parte estime de manera razonada la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y se reconoce **a esta estimación como un medio de prueba que, de no ser objetada, también de manera razonada, o de no mediar una notoria injusticia, ilegalidad o sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena**". (resaltos fuera del texto).

9. La H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA² (misma que relacionó el A quo) ha indicado: "(...) **De conformidad con el artículo 175 del CPC sirven como medios de prueba**' la declaración de parte, **el juramento**, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez...".

El juramento como **medio especial de prueba** es la afirmación solemne que una persona hace ante un juez de decir la verdad.... En las manifestaciones que haga... desde esa perspectiva el juramento ha sido definido como "la declaración por la cual una parte afirma como verdadero un hecho en la forma grave y solemne prevista por la ley, y puede considerarse **como un medio de prueba de naturaleza testimonial**..."

En la misma providencia citando apartes de pronunciamientos de la CORTE CONSTITUCIONAL agregó: "(...)por las mismas razones se permite que la parte estime de manera razonada la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y **se reconoce a esta estimación como un medio de prueba** que, de no ser objetada, también de manera razonada, o de

² Sentencia STC5797-2017 M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Radicado 052663103001 201400041 01
J.G.R.G

no mediar una notoria injusticia, ilegalidad o sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena.

"En efecto tal manifestación tenía la virtualidad de erigirse como **elemento de convicción para acreditar tanto los perjuicios como su monto**, pues no fue objetado por la pasiva, quien se insiste, no contestó el libelo. Y en todo caso **si los juzgadores, consideraban elevada la cuantía aducida por el tutelante, allá demandante, han debido decretar pruebas de oficio** para establecer su veracidad, tal como lo preveía el anotado artículo 211 del Código de Procedimiento Civil; no obstante, nada de ello se adelantó en el juicio confutado... Y se agregó: Se relievra que a los funcionarios judiciales tal como lo prescribe el artículo 187 del Estatuto Procesal Civil, les **corresponde evaluar los elementos de Juicio de forma conjunta** y sobre cada uno deben exponer" (...) siempre razonadamente el mérito que le asignen (...) ". En relación con lo expuesto esta Corte ha indicado : " (...) En torno a la ausencia de valoración probatoria) ha expuesto la Corporación que uno de los supuestos que estructura aquella es el defecto fáctico en el que incurre el juzgador cuando sin razón justificada niega el decreto o la práctica de una prueba, omite su valoración o lo hace de forma incompleta o distorsionando su contenido; incluso cuando olvida apreciar el material probatorio en conjunto o le confiere mérito probatorio a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado...."

En concordancia con lo anterior, el artículo 206 del mismo estatuto procesal ha consagrado la figura del juramento estimatorio en los siguientes términos: "Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo".

10. Si se analizan las anteriores disposiciones, es claro que el juramento se tiene como un medio de prueba y atendiendo el tenor literal del artículo 206, el juramento estimatorio se puede admitir como un medio que sirve como prueba del monto de los perjuicios

pedidos en la demanda y que servirá como prueba definitiva de dicho monto mientras la cuantía así establecida no sea debidamente objetada por la parte demandada y fue esa precisa determinación la que asumió el A quo, al tomar los valores indicados en la demanda, desconociendo de paso, varios aspectos que también en forma puntual la norma trae consigo. En primer lugar, que se deben discriminar cada uno de los conceptos y si volvemos a la demanda, en el acápite correspondiente se lee: **"JURAMENTO ESTIMATORIO.** *El demandante manifiesta bajo la gravedad del juramento.... que las sumas solicitadas a título de indemnización de los perjuicios sufridos, están estimadas y valoradas razonablemente, por consiguiente estiman la cuantía de la demanda en \$668.741.351 sin perjuicio de los daños extrapatrimoniales"*, resaltándose que al requisito se dio cumplimiento para **estimar la cuantía** de la demanda, siendo preciso aquí advertir que la ley 1395/10 modificó el artículo 211 del CPC, ampliando su cobertura de aplicación; no obstante la importante modificación que hizo, el CGP recoge dicha prueba en el artículo 206, que entró en vigencia desde julio de 2012 con ciertas precisiones, lo que significa que antes de ello, solamente se constituía como un requisito formal de la demanda y prueba obligatoria sobre los montos de las pretensiones, pero en este caso la demanda fue presentada en el año 2014 en vigencia de dicha disposición en los términos transcritos . En **segundo lugar**, dice la norma, *"aun cuando no se presente objeción de partes, **si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar**, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias **para tasar el valor pretendido**"*, que fue lo que ocurrió en este caso, que decretó un dictamen pericial con el fin de que se determinaran *"los perjuicios materiales peticionados en la demanda"*, dictamen que finalmente no pudo ser tenido en cuenta en el ítem que interesa al caso, porque se tomaron valores diferentes; si se decretó la prueba, era justamente porque se

estaba en presencia de alguno de los supuestos de la norma citada y que la estimación fue injusta o ilegal o sospecha de fraude, colusión o cualquier otra situación y es aquí donde no hay concordancia, porque sin explicación lógica, se vuelve a las pretensiones, acogiendo la sumas allí indicadas, preguntándose entonces, cuál fue el objeto de la prueba de oficio, máxime cuando al presentarse la objeción por error grave y solicitarse el nombramiento de un nuevo auxiliar, ello se niegue con las razones que en su momento se expusieron, pero que no viene al caso debatir porque no es el objeto de la apelación. **En tercer lugar,** de la norma también se extrae que se hace referencia al monto de los perjuicios, pero no a su existencia, los cuales son carga de la parte demandante con los diversos medios de prueba que allegue y es aquí donde no se puede desconocer que esa valoración probatoria no la hizo el A quo generando por ende, la inconformidad de los recurrentes, máxime cuando en la demanda se afirmó que el monto era para determinar la "*cuantía de la demanda*" mientras que en el escrito donde la parte demandante descurre el traslado de las excepciones, alude es a la *cuantía de la indemnización pretendida en la suma de \$668.741.351*". **En cuarto lugar,** se advierte que la objeción tendría fundamento cuando se explica razonadamente la inexactitud que se le atribuye a la estimación, lo que claramente da a entender que sería sobre el monto, no sobre su existencia o prueba y aquí es viable resaltar que si bien es cierto, no se objetó, también lo es, que ambos demandados propusieron como excepciones la falta de prueba del daño y la tasación excesiva de perjuicios, entre otras, mismas que debieron ser analizadas, máxime si se tiene en cuenta que justamente en la misma sentencia que el A quo citó para advertir que el juramento era prueba suficiente, se tutelaron los derechos del solicitante porque no hubo la valoración de la prueba en debida forma,

sentencia en la cual se transcribieron apartes que ya se citaron. En quinto lugar, porque la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA³ ha decantado en múltiples intervenciones que *"En lo que respecta a la certeza cabe decir que corresponde al perjudicado **demostrar su existencia**, sin lo cual es imposible acceder a la indemnización que se reclama, de manera que, se insiste, si ella no se evidencia, sin sustento se queda el reclamo para que se imponga su resarcimiento o compensación, al paso que si es clara su causación ésta saldrá avante por el monto de lo así acreditado. Por ello es que la Corte ha dicho que "... sólo corresponde reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado y como consecuencia inmediata de la culpa o el delito...", y ha puntualizado así mismo, "... que de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, **quien demanda judicialmente la indemnización de un perjuicio que ha sufrido le corresponde demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación persigue y su cuantía**, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento padecido por la víctima"*.

11. Al margen de todo, es pertinente recordar que la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA⁴ ha indicado recientemente que: *"aunque **en la demanda se hizo el juramento estimatorio, tal acto no relevaba a los actores de acreditar la existencia del perjuicio. La prueba del incumplimiento y del menoscabo derivado del mismo era necesaria para la estimación de las pretensiones**. Incluso, el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso establece una sanción al litigante «...en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios...», ello con el condicionamiento establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 2013². En tal orden, y ante la falta de demostración del incumplimiento imputado a la parte demandada por los conceptos aludidos, debía negarse el petitum, tal y como lo hizo el Tribunal"*. Y finalmente, es cierto que la norma establece que si no se objeta el juramento

³ Casación Civil de 22 de marzo de 2007. M. P. Dr. Edgardo Villamil Portilla.

⁴ SENTENCIA SC 876-2018 14 DE MAYO DE 2018. M.P ARIEL SALAZAR RAMIREZ

estimatorio ello hace fe o prueba de la existencia del daño y del perjuicio, pero además, ofrece la posibilidad al juez de intervenir en ese aspecto tal como se hizo y es por ello, que acogiendo los parámetros jurisprudenciales citados, se tendrá como un medio de prueba más para analizar junto las demás allegadas, máxime si se tiene en cuenta, que la Corte Suprema establece que aunque en la demanda se hizo el juramento estimatorio, tal acto no releva a los actores de acreditar la existencia del perjuicio.

Es por lo anterior que tratándose de perjuicios reclamados por la declaratoria de responsabilidad civil donde existen directrices claras de la Alta Corporación de analizar las pruebas en conjunto, a ello se procederá conforme los argumentos dados en los recursos de impugnación, teniendo en cuenta además que se ha indicado: ***"El resarcimiento del daño, en su modalidad de lucro cesante y más aún, tratándose del calificado como «futuro», se reitera, resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone «rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido»*** (CSJ SC11575-2015, rad. 2006-00514-01).

12. El lucro cesante. *Conforme a lo indicado en el artículo 1614 del Código Civil, el lucro cesante es la pérdida de la ganancia, beneficio, utilidad que sufre el perjudicado como consecuencia del hecho dañoso, es lo que deja de ingresar en su patrimonio económico a raíz de éste. Este concepto se divide en **lucro cesante consolidado** y futuro, el primero comprende las sumas que dejaron de ingresar al patrimonio del demandante, **desde la ocurrencia del hecho dañoso y hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia** y el segundo concepto, corresponde a las sumas de dinero que dejarán de entrar al patrimonio del demandante **desde la fecha de la sentencia hasta el límite de su expectativa de vida** y vale decir que **corresponde al perjudicado demostrar***

su existencia, sin lo cual es imposible acceder a la indemnización que se reclama, de manera que, se insiste, si ella no se evidencia, sin sustento se queda el reclamo para que se imponga su resarcimiento o compensación; así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia⁵.

13. Asistidos del criterio en comento, debe abordar la Sala el estudio de la pretensión de la parte actora en el sentido de reconocerle o no a la esposa y los hijos de la víctima, la indemnización derivada del lucro cesante correspondiente, teniendo en cuenta los aspectos relacionados en la demanda y las disposiciones de la CORTE SUPREMA que no relevan a los actores de la demostración de los perjuicios y su cuantía, ello confrontado con lo probado en el trámite correspondiente, al afirmarse que el señor CASTRILLÓN CATAÑO era médico de profesión para la CORPO IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, devengando la suma de \$2.799.357 y el ingreso adicional mensual de \$960.000 para un ingreso total \$3.759.357, suma sobre la cual se pretendió se realizaran las liquidaciones.

Para verificar lo anterior, fue allegado al plenario como prueba documental que los legitima para el cobro: certificados que dan cuenta del vínculo matrimonial de los señores PETTER CASTRILLÓN Y MAGDALENA TRUJILLO, (folios 7) al igual que los registros de nacimiento de sus hijos LUIS EDUARDO Y CATHERINE (folios 10 y 12 cuaderno principal).

14. A folios 31 un certificado de la DIAN sobre el certificado de ingresos del año 2012 del señor PETTER CASTRILLÓN, donde se lee: asalariado CORPO IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. A folios 32 una certificación expedida el **10 de septiembre de 2013** donde la señora **MIRIANS LUZ CARRASQUILLA QUINTERO** informa

⁵ Casación Civil de 22 de marzo de 2007. M. P. Dr. Edgardo Villamil Portilla.

que el señor CASTRILLÓN, *"desde hace 2 años se desempeñaba como docente particular de inglés de mi hijo Luis Guillermo Muñetón, 2 horas 3 veces a la semana, por lo cual le pagaba \$35.000 en efectivo por hora.... Lo que correspondía **a \$210.000 semanales**".* A folios 33 se allega otra certificación del 18 de septiembre de 2013 donde la señora **MARÍA JUDITH CASTILLO MONTOYA** certificó los ingresos mensuales que devengaba el señor Castrillón *"por concepto de enseñanza del idioma inglés a mi hijo Simón Cano Castillo, el valor devengado ascendía a la suma de **\$750.000**".*

15. Y testimonialmente no se allegó prueba alguna tendiente a demostrar los aspectos relacionados con el citado perjuicio. Solamente se cuenta con los interrogatorios que absolvió la parte demandante. La señora **MAGDALENA TRUJILLO RESTREPO** indicó que convivía con el señor PETTER y sus hijos y al ser preguntada sobre la ocupación de dicho señor al momento de los hechos indicó: *"Él trabajaba en la Clínica León XIII en el área de cuentas médicas hacía por ahí 3 o 4 años, no lo recuerdo bien, trabajó primero como por servicios o algo así, en la clínica él se ganaba \$2.700.000, el tenía diferentes tipos de contratos, pero no todos los contratos fueron con la IPS UNIVERSITARIA y adicionalmente trabajaba como profesor de inglés con un salario variable de \$1.00.000 de pesos (sic)"* y agregó que entre los dos asumían los gastos familiares... *Petter había acabado de terminar una especialización, era tecnólogo en costos y auditorías, licenciado en lenguas extranjeras y una especialización en el área de finanzas médicas".* La señora **CATHERINE CASTRILLÓN TRUJILLO** indicó que no vivía con su padre al momento de los hechos: *"... me había ido a estudiar al exterior, pero ellos aun me daban, me enviaban dinero para yo sobrevivir allá en TARRAGONA ESPAÑA, allá vivía con mi pareja, pues un novio que tenía allá...ellos me ayudaban cuando mi salario no me daba.... En pesos no sé... me llegan 100 euros para completar, no era una cuota fija, era esporádico..."* Y respecto a la ocupación de su padre indicó: *"él trabajaba en la LEÓN XIII en facturación, era el área de finanzas y dictaba clases particulares a niños... no se cuánto se ganaba.... Tenía un estudio en el politécnico como de números... y fue licenciado en lenguas extranjeras y una especialización*

en finanzas de la salud". El joven **LUIS EDUARDO CASTRILLÓN** dijo estar en grado 11 de bachillerato al momento de los hechos, dijo que su padre "trabajaba en la IPS UNIVERSITARIA y daba clases de inglés. Al ser preguntado: "su padre era médico o no? CONTESTÓ. "**No, no era médico, estaba enfocado a la salud, pero no**".

16. Analizando el material probatorio allegado, lo único que quedó esclarecido es que, contrario a lo que se afirma en la demanda, el señor PETTER no era médico de profesión; se deduce que sí laboraba, pero documentalmente no se acreditó la asignación salarial que recibía, pues nótese que en la demanda se afirma que devengaba la suma de \$2.799.357 sin un soporte que lo demuestre, porque si bien es cierto que se allegó el certificado de ingresos y retenciones de la DIAN, también lo es, que ello solo demuestra el total de los ingresos percibidos, pero de ahí no se desprende la suma a la que se alude, ni el valor promedio de sus ingresos, en tanto no se allegan anexos. Es más, no se reportan ingresos adicionales al salario, a pesar de las clases de inglés que se indica en la demanda y de las que se afirma devengaba mensual \$960.000 y en el dictamen que elaboró el perito designado por el juez, éste último concepto lo tomó en la suma de \$1.590.000 (que fue la causa para desechar el dictamen en ese aspecto por falta de prueba) y adicional, la esposa de aquél indicó que se ganaba la suma de \$2.700.000 y ninguna de las cifras citadas tiene soporte, llamando incluso la atención que también afirmó que fue pensionada en la suma de un millón de pesos, también sin ningún soporte (suma incluso muy cercana al salario mínimo).

17. Para valorar las certificaciones allegadas con respecto a lo devengado por las clases de inglés que ofrecía el señor PETTER, debemos recordar que fueron expedidas en vigencia del C.P.C, de

hecho a la demanda se dio trámite de un proceso Ordinario y para tal efecto ha indicado la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA⁶ en relación con las pruebas documentales de naturaleza declarativa: *"(...) en lo tocante con su eficacia probatoria, ninguna norma procesal ha exigido la autenticidad», toda vez que «por sus características especiales, han tenido una regulación también particular que, en la legislación permanente, ha consistido en asimilarlos a los testimonios para efecto de su ratificación (o, más bien, su recepción directa), salvo cuando, por acuerdo de las partes se acepta el documento como tal (arts. 277, num 2º ., y 229 inciso 2º C. de P.C.)"* (CCXLIII, págs. 297 y 298). Pero a partir de la vigencia del decreto especial de descongestión antes aludido, *"Esa 'ratificación', que en realidad consiste en recibir una declaración testimonial juramentada, fue la que se relegó..., con la salvedad de que debe producirse siempre y cuando la parte contra quien se presenta lo solicite de manera expresa. (...)"* . Y en el caso analizado, la parte demandada sí solicitó ratificación, pues claramente se lee en el escrito de excepciones frente a la falta de prueba del daño: *"...los documentos emanados de terceros tal cual lo establece el código de procedimiento civil en su artículos 252,253,254,268 y 279.... entre otros, darán fe de autenticidad que se presume para todo documento público...pero no respecto de los emanados de terceros, como expresamente lo refiere el inciso 4º del artículo 252 del CPC, siendo estos motivo de inconformismo y que todos y cada uno de los documentos deberán ser ratificados y autenticados por quienes los suscribieron de manera testimonial",* ello al margen de que hubiese sido analizado si era válido o no decretar la prueba ante la falta de individualización de cada documento y a que finalmente no se solicitó como prueba y ninguna alusión se hizo respecto de ello. Lo que se desprende de lo anterior, es que dichos documentos debieron ser ratificados, máxime si se tiene en cuenta que analizando su contenido, no guardan coherencia para establecer de ellos cuánto era lo devengado mensualmente, pues es claro que mientras que una afirma que devengaba \$210.000 **semanales** y la otra afirma \$750.000 **mensuales** y lo que hace la parte

⁶ Sentencia SC5533-2017 21 DE JUNIO DE 2016. M.P. MARGARITA CABELLO BLANCO

demandante es sumar, simplemente para afirmar que el ingreso **ADICIONAL MENSUAL** era \$960.000, lo que no tendría lógica, porque asume una suma mensual que supuestamente es semanal, aparte de que con dicho documento no es viable establecer periodos concretos, ni pagos efectivos ni fechas de iniciación.

18. De igual manera en otro pronunciamiento también reciente, la Alta Corporación⁷ y referido concretamente a la valoración de unas pruebas no ratificadas indicó: ***"Cuando se busca la indemnización de perjuicios patrimoniales en el rubro de lucro cesante, el afectado tiene la doble carga de llevar al convencimiento, por un lado, de que éstos ocurrieron ante la disminución o interrupción de unos ingresos que se tornaban ciertos y, del otro, de cómo cuantificarlos, bajo la premisa de que su propósito es netamente de reparación integral, sin que pueda constituirse en fuente de enriquecimiento. Las falencias que se presenten en uno u otro campo tienen distintas connotaciones, puesto que de no comprobarse la existencia del perjuicio fracasarían las pretensiones por la ausencia de uno de los supuestos imprescindibles de viabilidad de la acción.***

Respecto de esa dualidad, en la providencia CSJ SC, 28 Feb. 2013, Rad. 2002-01011-01, se enfatizó en (...) la autonomía e independencia de cada uno de esos laboríos, pese a su estrecha relación, y que, por consiguiente, no debe confundírseles como si se tratara de una misma actividad **y, menos aún, sujetarse la demostración del daño a la de su quantum....** Mientras que la falta de acreditación del daño conduciría a colegir la insatisfacción del más importante elemento estructural de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y, por ende, el fracaso de la correlativa acción judicial, la insatisfacción del segundo impone al juez decretar "de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias" para condenar **"por cantidad y valor determinados.....)** Incluso, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha señalado que es posible acudir a la equidad para determinar el monto del daño.

⁷ SENTENCIA SC20950-2017. Radicación nº 05001-31-03005-2008-00497-01. Magistrado Ponente. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

La Sala encuentra que **el sentenciador ad quem incurrió en los errores de derecho y de hecho** que le atribuyó la censura en los cargos que se estudian...teniendo en cuenta que para efectos de fijar la base de liquidación del lucro cesante, el Tribunal acogió el monto reportado por el aludido contador como ingresos mensuales del fallecido... **a pesar de que ese documento ciertamente no ofrecía respaldo sólido e indiscutible a tal conclusión”.**

Al margen de todo lo anterior, se puede afirmar válidamente que con las certificaciones de las clases de inglés que ofrecía el señor PETTER, no es viable deducir un ingreso periódico y cierto y en una suma concreta en los términos indicados por la máxima corporación y que justamente esa disminución en la cifra y la imposibilidad de recibirla ante la ocurrencia del hecho, constituya el perjuicio que se pretende.

19. Así las cosas, siguiendo los antecedentes jurisprudenciales de nuestro máximo órgano de cierre⁸, se ha considerado que “si se demuestra que la víctima ejercía actividades lícitas, que representaban retribución, **la falta de prueba respecto a sus ingresos, no puede ser obstáculo para otorgar la indemnización pretendida por concepto de lucro cesante**; más bien, su negación se tornaría injusta e inequitativa, al estar acreditado el daño y el llamado a responder. Por tanto, en desarrollo de lo previsto en los artículos 230 de la Carta Política, 16 de la Ley 446 de 1998 y el principio de reparación integral, se impone acudir a los criterios auxiliares de la actividad judicial, dentro de ellos la equidad, la doctrina y la jurisprudencia”...”... **en desarrollo de los principios de reparación integral y equidad, se calculará el lucro cesante con base en el salario mínimo legal mensual vigente, pues si sólo ahora se va a efectivizar la indemnización, la actualidad del estipendio permite que la pérdida del poder adquisitivo del dinero quede involucrada....** ante la falta de otros elementos de juicio, la Corte acoge el salario mínimo legal como base para establecer el ingreso mensual...”.

⁸ Sentencia SC 15996-2016 M.P LUIS ALONSO RICO PUERTA
Radicado 052663103001 201400041 01
J.G.R.G

20. Está acreditado que el señor PETTER ejercía labores en el área de la salud, que no de médico, en su condición de asalariado CORPO IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (teniendo la información que reposa en el certificado de ingresos de la DIAN) y para la liquidación el A quo tomó como base, el salario que se reportó en la demanda, cifra que mereció reparos en el escrito de impugnación, alegando que dicha suma no fue probada y que la Sala comparte, de acuerdo a lo expuesto; por lo tanto, se tomará como base el salario mínimo de este año, dado que una suma superior no fue debidamente acreditada y que obliga a realizar la liquidación bajo este parámetro.

Para lo anterior, se tendrá en cuenta en primer lugar la situación de la señora **MAGDALENA TRUJILLO**, esposa del fallecido, que se acreditó con el correspondiente registro y quien además, indicó que convivía con éste junto con su hijo LUIS EDUARDO, porque la otra hija CATHERINE vivía en España y aunque manifestaron que su padre trabajaba, no supieron indicar ni el salario ni con qué porcentaje concreto colaboraba, pero sí aludieron a que contribuía con los gastos del hogar junto con la señora MAGDALENA y se hacían cargo de los gastos. En sentir de la Sala, la esposa y su hijo LUIS EDUARDO son merecedoras del pago por lucro cesante, atendiendo a que de la prueba allegada, se vislumbra que aquella y la víctima, tenían un vínculo conyugal y ambos sostenían el hogar, siendo indudable el perjuicio ocasionado, en tanto se demostró no solamente que laboraba y tenía ingresos, sino también que sostenía el hogar y de él dependía el menor de edad, como también se aludió a una convivencia permanente, de donde puede derivarse una dependencia económica frente al fallecido, lo que implica que dejaron de percibir una suma como consecuencia de su muerte, a pesar de que también la señora MAGDALENA laboraba. No se

tomará la misma decisión respecto a la hija CATHERINE teniendo en cuenta que también quedó establecido que al momento de los hechos, vivía en España y según indicó llevaba viviendo allí 5 años y a pesar de que indicó que le enviaban dinero para sobrevivir, incluso habló de 100 euros, también advirtió que *"no era una cuota fija, era esporádico"* y lo más importante, también indicó *"allá vivía con mi pareja, pues un novio que tenía allá... Yo trabajaba limpiando..."*, de donde no es posible con ello afirmar válidamente que era su padre quien la sostenía económicamente pues de ello no hay prueba, porque como bien lo dijo, la ayuda era esporádica, aunado a que tenía convivencia con su pareja y trabajaba y aunque indicó que estudiaba, en el expediente no reposa ninguna prueba que así lo certifique, porque si bien en los hechos de la demanda a ello se aludió, incluso indicando que se allegaba el certificado, no se hizo y ni siquiera está relacionado en el acápite donde se discriminan las pruebas allegadas. Y menos se comparten las afirmaciones del demandante cuando a pesar de que no hay pruebas, pretendió en el escrito donde descorre las excepciones, afirmar que la dependencia se presume, fundamentado en sentencias del Consejo de Estado que cita, desconociendo además, que el máximo órgano de cierre de la jurisdicción Civil es la Corte Suprema de Justicia que en reiteradas providencias exige su demostración, ello no puede presumirse.

21. Es por ello que la Sala procede a realizar la liquidación en debida forma y tomará como base el salario mínimo legal mensual vigente (\$908.526) porque es en este instante es que se hace efectiva la liquidación, teniendo en cuenta además, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y que a dicha suma debe descontarse el 25% de los gastos personales de la víctima,

quedando la diferencia a disposición de quienes tienen derecho a ser indemnizados, en este caso la señora MAGDALENA y su hijo LUIS EDUARDO, suma que equivale a \$681.394,50, monto que se dividirá en mitades, arrojando la suma de **\$340.697,25**. Según la prueba obrante en el expediente, el señor PETTER CASTRILLÓN nació el 14 de junio de 1968 y su muerte acaeció el 21 de febrero de 2013, contando para dicha época con 44 años 8 meses 6 días. Según las tablas de mortalidad, la Resolución 1555 de 2010 de la Superfinanciera vigente para la época de los hechos y que no requiere prueba por ser hecho notorio, su probabilidad de vida era **37** años o 444 meses, lo que significa que a la fecha de corte de esta liquidación 15 de septiembre de 2021 si hubiese sobrevivido, podría contar con **53** años o 636 meses. Su esposa nace el 29 de junio de 1979 para la fecha del fallo tendría 42 años 2 meses 17 días, con una expectativa de vida de **43.7** lo que indica que le sobreviviría a su esposo, por lo cual el aporte económico que le brindaría solo sería hasta su muerte, por ello se tomará la menor vida probable que corresponde a éste y equivale a 444 meses.

22. Así las cosas, se contabilizará el lucro cesante consolidado desde el 21 de febrero de 2013 hasta la fecha de corte de esta sentencia 15 de septiembre de 2021 y el futuro a partir de ésta y por la expectativa de vida ya indicada.

$$LCC = \frac{RA \times (1+i)^n - 1}{i}$$

Donde "RA" es la renta actualizada, "i" es el interés a aplicar -en este caso el legal, equivalente al 6% anual o 0,5% nominal mensual (0,005)-, y "n" es el número de meses a liquidar -en este caso el número de meses corridos desde la fecha del accidente 21

de febrero de 2013 al 15 de septiembre de 2021 esto es 102 meses:

$$LCC = \frac{RA \cdot (1+i)^n - 1}{i}$$

$$LCC = \$340.697,25. \frac{(1+0,005)^{102}-1}{0,005}$$

$$LCC = \$45.176.455,35$$

23. El lucro cesante futuro, va desde el proferimiento de la sentencia y hasta la vida probable del fallecido. En este caso, se estableció en 444 meses más de vida a indemnizar, tiempo al que debe restarse los 102 meses ya reconocidos por lucro cesante, para un total de 342 meses. Para ello se utiliza la siguiente fórmula:

$$LCF = \frac{RA \cdot (1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

Donde "RA" sigue siendo la renta actualizada, "i" el interés legal a deducir (6% anual o 0,005% mensual) y "n" el número de meses a liquidar, en este caso 342 meses:

$$LCF = RA \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

$$LCF = \$340.697,25. \frac{(1+0,005)^{342}-1}{0,005(1+0,005)^{342}}$$

$$LCF = \$56.845.676,85$$

24. Al plenario fue allegada copia del registro de defunción del señor PETTER CASTRILLÓN al igual que el registro de nacimiento de **LUIS EDUARDO CASTRILLÓN TRUJILLO** que la acreditan como su hijo, documento que es plena prueba para acreditar el

parentesco y que lo legitima para reclamar perjuicios y además se afirmó que su padre velaba económicamente por éste, tanto que al momento de los hechos cursaba grado 11 de bachillerato y según indicó al momento del interrogatorio, cursaba tercer semestre de enfermería. El perjuicio para él se establece de la siguiente manera: **LUIS EDUARDO.** Se tendrá en cuenta la misma suma con la cual se liquidaron los perjuicios de la madre de éste, víctima también del suceso, incluido el descuento de sus gastos personales, esto es la suma de \$340.697,25 contabilizando el lucro cesante consolidado desde el 21 de febrero de 2013 (fecha del fallecimiento) hasta la fecha de liquidación de esta sentencia (15 de septiembre de 2021) arroja 102 meses.

$$LCC = \frac{RA \cdot (1+i)^n - 1}{i}$$

$$LCC = \$340.697,25 \times \frac{(1+0,005)^{102} - 1}{0,005}$$

$$LCC = \$45.176.455,35$$

25. Para el lucro cesante futuro, se tendrá en cuenta que el fallecido había nacido el 14 de junio de 1968, contaba con 44 años 8 meses 6 días, con probabilidad de vida era **37** años o 444 meses, enmarcándose en ellos el tope hasta lo que velaría por su hijo y que deben indemnizarse, descontando los tenidos en cuenta para el lucro cesante consolidado. Según el registro civil de nacimiento del menor, nació el 27 de septiembre de 1996, lo que indica que la misma época del año 2021 alcanzaría sus 25 años y como su padre falleció el 21 de febrero de 2013, significa que el lapso a indemnizar sería 103 meses, faltante para cumplir la edad, que arroja 103 meses y descontando los 102 meses tenidos en cuenta del lucro cesante consolidado arroja la suma de 1 mes.

$$LCF = RA. \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$i (1+i)^n$$

$$LCF = \$ 340.697,25 \times \frac{(1+0.005)^{1-1} - 1}{0.005 (1+0.005)^1}$$

$$LCF = \$340.697,25$$

Así las cosas, con las modificaciones realizadas se procederá en la parte resolutive y en cuanto a las costas en segunda instancia, a pesar del resultado del recurso de impugnación, no es viable la condena en costas a la parte demandante, en tanto está amparada por pobre.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia del 8 de abril de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Envigado, dentro del proceso VERBAL de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL instaurado por MAGDALENA TRUJILLO RESTREPO, en su nombre y representación de LUIS EDUARDO CASTRILLÓN TRUJILLO Y CATHERINE CASTRILLÓN TRUJILLO en contra de JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ PALACIO Y JUAN CARLOS GRISALES GONZÁLEZ.

SEGUNDO. MODIFICAR EL NUMERAL CUARTO, solamente en el monto de las condenas, en lo que toca con el **lucro cesante**

consolidado y futuro, porque el resto de la condena no mereció objeción, las cuales quedan de la siguiente manera:

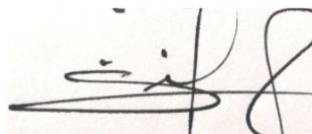
- a) En favor de la señora **Magdalena Trujillo Restrepo**: Lucro cesante consolidado la suma de **\$45.176.455,35** y futuro la suma de **\$56.845.676,85**.
- b) En favor de **Luis Eduardo Castrillón Trujillo**: por lucro cesante consolidado la suma de **\$45.176.455,35** y futuro la suma de **\$340.697,25**. **SE REVOCA** la suma concedida en favor de CATHERINE CASTRILLON respecto al reconocimiento de lucro cesante consolidado, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. El resto de la decisión no mereció reparos.

CUARTO. Sin costas, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO.: Ejecutoriada la sentencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín